



PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

TEMAS DE DISCUSION PARA EL VIII PLENO NACIONAL

1. El tipo de salida hacia la democracia

La discusión respecto del tipo de salida política que se ha configurado en nuestro país resulta relevante, por cuanto ella prefigura las correlaciones de fuerza que existirán durante la transición y el carácter y naturaleza de los objetivos que corresponde plantearse para tal período.

De modo sintético, podemos afirmar que la transición a la democracia se genera desde un equilibrio relativo de fuerzas, desde el cual las fuerzas opositoras salen victoriosas gracias a su mayor capacidad de adecuarse al escenario creado, con una política de hecho única y correcta.

En efecto, este equilibrio relativo de fuerzas fluye del hecho que la oposición, principalmente entre 1983 y 1986, acumula una fuerza significativa, que sin embargo no es capaz de derrocar a la dictadura, y que esta última, a partir de su capacidad por sostenerse, implementa un diseño de institucionalización que no logra servir a su propósito de perpetuarse en el poder.

De este cuadro la oposición resulta ganadora, gracias en primer lugar a que todo el desarrollo previo de la lucha de masas -especialmente entre 1983 y 1986- constituyó una base de fuerza sólida desde la cual fue posible construir una política capaz de enfrentar y derrotar el plan de perpetuación de Pinochet (recuérdese que esa base de fuerza no existía para el plebiscito de 1980).

En segundo lugar, a partir de esta fuerza social y política, fue decisivo para abrir paso a la transición democrática la generación de hecho de una política única de la oposición, en la que clave el aprovechamiento de las propias herramientas del plan del régimen, tales como los registros electorales, la inscripción de partidos legales y la participación con el voto NO en el plebiscito. Herramientas que sirvieron para ampliar la fuerza gestada en los previos, vinculando y haciendo partícipes efectivas a las grandes mayorías nacionales.

La incidencia que el tipo de salida construida tiene sobre la naturaleza del próximo período es precisamente lo que nos hace hablar de que se inicia un período de transición a la democracia y no de que estamos a las puertas de reconquistar la plena democracia. En efecto, el que no se haya producido el derrocamiento del régimen significa que, aún con el triunfo que obtendremos en diciembre, no podemos afirmar que el modelo autoritario y las fuerzas que lo sustentan, tanto sociales y económicas como políticas y militares, habrán sido plenamente derrotadas, en el sentido que queden impedidas de poner cortapisas a la democracia y de rearticular su modelo de dominación en el futuro.

Lo anterior significa que buena parte del dilema entre dictadura y democracia se proyecta hacia el futuro, en un cuadro de fuerzas distinto eso sí, por cuanto éste será favorable al campo democrático, gracias a

Importancia fundamental de la construcción del plebiscito

Inicio del período de transición
2 se reconoce que aunque se tiene en la práctica no hay derrocamiento del modelo autoritario

su conquista efectiva de una mayoría nacional y al relevante hecho de que dispondrá del gobierno y de una mayoría parlamentaria.

La contradicción sigue siendo entre Dict y Dem
Esta contradicción entre dictadura y democracia, en el nuevo período que se inicia, se proyecta como la contradicción entre las fuerzas que desde el movimiento de masas, el gobierno y el Parlamento pugnan por consolidar la democracia y aquellas que desde las Fuerzas Armadas, la derecha política y económica y las clases [propietarias] pugnan por restringir la democracia a formas autoritarias, como única manera de impedir que el desarrollo del movimiento popular, en una democracia efectiva, sea capaz de resolver la contradicción fundamental que opone al socialismo con el capitalismo.

línea divisoria
Siendo así, se establece la línea divisoria principal del período de transición, que sigue siendo la misma prevaleciente en estos años y contenida en nuestra línea política. Por tanto, para los socialistas y la izquierda se trata de acrecentar y afianzar la máxima unidad y consecuencia posible de los sectores democráticos, de modo de confrontar con el máximo de fuerzas el autoritarismo que seguirá vigente.

Lo anterior no significa ignorar -como veremos más adelante- que está en juego el tipo de democracia a construir y que, en torno a la idea fuerza unificadora de consolidar la democracia, los socialistas y la izquierda pugnemos por conquistar la hegemonía en la sociedad para un proyecto de permanente ampliación y profundización democrática, en torno a un modelo de corte anticapitalista y de perspectiva socialista, que le dé a esa democracia contenido no sólo político, sino también económico, social y cultural.

Si bien es cierto que los elementos descritos configuran el tipo de salida y la naturaleza del próximo período, también ocurre que es relevante para las opciones futuras lo que suceda electoral y políticamente de aquí a diciembre y también a marzo del próximo año, fecha en que asume el próximo gobierno.

Analizar y emprender las tareas políticas y electorales de aquí a diciembre resulta clave. Ello requiere acrecentar la fuerza social y política existente, desarrollar su participación y obtener un gran triunfo electoral en la elección presidencial y parlamentaria. En esta última -aunque de modo restringido por la ley electoral y los acuerdos por omisión- tenemos la posibilidad de proyectar la fuerza del socialismo unido y de la izquierda en su conjunto, gracias al acuerdo PAIS-PPD y al acuerdo de campaña común socialista, lo que nos permitirá enfrentar el futuro con más fuerza para emprender la tarea de democratización.

Se trata de incrementar significativamente la votación del 5 de octubre, con un gran triunfo de Aylwin, de todos los parlamentarios democráticos, consiguiendo una alta representación para la izquierda y eligiendo a todos los candidatos socialistas.

2. El carácter de la transición democrática

Algunas de las características del próximo período ya han sido planteadas; interesa acá profundizar en algunos aspectos.

Previo a ello, es preciso señalar que la transición democrática no la estamos concibiendo restringida a su definición jurídico-institucional de un próximo gobierno de cuatro años, sino que la entendemos como el

proceso tendiente al restablecimiento pleno de la soberanía popular o, dicho de otro modo, la consolidación institucional y político-cultural de la democracia.

Esto significa que para las fuerzas de izquierda la transición habrá culminado, y podremos hablar de una auténtica democracia en Chile, cuando el grado de derrota y aislamiento de los sectores autoritarios sea tal, que en esa democracia, quienes la concebimos con una perspectiva socialista podamos no sólo subsistir dentro de ella, sino competir en igualdad de condiciones para hacer prevalecer nuestro proyecto revolucionario, de modo que llegue a ser compartido por la mayoría del pueblo, a través de la conquista de la hegemonía político-cultural de la sociedad.

2.1. El bloque dominante frente a la transición

Las fuerzas del régimen parten de la base que serán derrotadas en las elecciones de diciembre. Por ello, su línea central es fortalecerse al máximo en las instancias de poder no sometidas al veredicto popular, dejarle el máximo de ataduras al próximo gobierno, que le dificulten su campo de acción, y enfrentar lo más cohesionadas posible la batalla electoral, aspirando a un estrecho triunfo de Aylwin y la conquista de una representación parlamentaria que le impida a la oposición por sí sola los quórum necesarios para futuras reformas a la Constitución.

Acá interesa analizar los ejes de fuerza en que se sostendrán estos sectores, los grados de cohesión con que contarán y la estrategia previsible que seguirán.

No parece previsible, aunque no puede ser descartada como opción, que intenten en el corto o mediano plazo un golpe de Estado, gracias a su control de las Fuerzas Armadas. Menos probable es esto mientras mayor sea el respaldo ciudadano a las fuerzas democráticas. Sin embargo, una salida de fuerza puede legitimarse en circunstancias de una profunda crisis política y social en el próximo período, resultado de las serias limitantes estructurales que el modelo de acumulación capitalista vigente le impone al desarrollo democrático integral. Crisis que políticamente puede expresarse en una profunda ruptura del arco democrático y de la mayoría social que se ha gestado.

Lo que parece más probable es que los sectores dominantes buscarán, a través de múltiples mecanismos, hacer fracasar la gestión gubernativa, restarle respaldo social y debilitar el frente democrático, de modo de rearticular como proyecto hegemónico un modelo de democracia autoritaria y restringida. Para este propósito, resulta crucial tensionar al máximo a la Democracia Cristiana respecto de su relación con la izquierda, lo que ya se observa en la campaña, cuando la derecha destaca que en el acuerdo parlamentario opositor van más candidatos ex-UP que democrátacristianos.

Por otra parte, el autoritarismo intentará cohesionarse a partir de la tríada Fuerzas Armadas, derecha política y derecha económica. El hecho de que se haya impuesto a Büchi como candidato, el rol del gobierno y del legislativo -controlados por las FF.AA.-, de aquí a marzo, para dejar el máximo de ataduras a la democracia y la dinámica de confrontación electoral, hacer perder el perfil propio buscado por Renovación Nacional y proyectan esta tríada autoritaria con un liderazgo del tipo UDI-pinochetismo, es decir lo más reaccionario de la derecha.

Lo anterior tiene como contrapartida la necesaria acentuación de la unidad opositora, lo que redundará en un creciente perfil progresista de la campaña -tómese en cuenta el contenido del discurso actual de Aylwin- que es necesario proyectar hacia el carácter del futuro gobierno.

Especial atención merece el debate respecto de las FF.AA., las cuales, si bien se retiran de la gestión gubernativa sufriendo una derrota política-electoral de graves consecuencias para su afán de perpetuarse en el poder, sin embargo se sienten artífices de una labor de honda proyección; son portadoras de una doctrina cohesionante, que las hace sentir garantes de la institucionalidad y factor de relativización de la soberanía popular, doctrina refrendada en la propia institucionalidad -artículo 90 de la Constitución- y respaldada por la derecha política y económica y por sectores sociales significativos.

Su intervención en la transición se legitimará a partir de la propia institucionalidad y en torno a temas políticos e intereses corporativos, tales como: la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, la Ley orgánica de las FF.AA., la definición de la política de defensa, la industria bélica, sus vinculaciones internacionales y, de modo relevante, el rechazo a cualquier juicio de tipo civil-político frente al tema de los derechos humanos. Cuestiones todas en las cuales asegurarán el respaldo y gestión de la propia derecha política y económica.

También tiene especial significación el favorable marco jurídico-institucional del conservadurismo, expresado en la Constitución de 1980, aún con las aprobadas reformas; la autonomía del Banco Central, que limita la gestión político-económica del futuro gobierno; las medidas relativas a la Televisión Nacional, que afectan el despliegue de la cultura democrática; el afianzamiento del poder local del régimen, por la vía de los alcaldes; la privatización de empresas estatales; las leyes electorales y de partidos políticos. En fin, un conjunto de herramientas de poder del autoritarismo, sin contar las que provienen de una economía altamente concentrada y dependiente del capital externo y de los flujos del comercio exterior, para no sufrir desequilibrios graves.

A ello se suma el significativo peso que, tras largos años de dominación, tienen en Chile las ideas conservadoras y los profundos cambios en la estructura social, que dificultan la articulación de sectores y movimientos sociales poderosos.

2.2. Las fuerzas democráticas frente a la transición

El conjunto de mecanismos y poderes con que el autoritarismo contará, que nos llevan a concluir que el dilema dictadura-democracia se proyectará más allá de la salida de Pinochet del gobierno, viene a señalar que la tarea por romper y derrotar esos mecanismos y poderes es el desafío común y unificador del conjunto de las fuerzas democráticas.

En torno a dicho desafío es posible forjar un amplio consenso, que involucre a todos los actores políticos y sociales democráticos, independientemente de si todos ellos forman parte del futuro gobierno.

Este consenso, hecho con el propósito de restablecer la plena soberanía popular, o, de otro modo, consolidar una democracia no sometida a amenaza

autoritaria, se funda en el desafío común de romper dichas amenazas y, por tanto, debe expresarse en una visión común respecto de la futura institucionalidad democrática y las bases políticas, económicas y sociales que factibilicen dicha democracia.

En términos más específicos, supone criterios comunes respecto de: futuras reformas constitucionales, nueva ley electoral y de partidos políticos, política frente a las FF.AA., reformas al sistema judicial, políticas frente al tema de los derechos humanos en torno a los criterios de verdad, justicia y reparación, y sobre la reorientación de la economía en favor de la justicia social. En suma, todos aquellos aspectos que hacen a la reinstalación efectiva de la democracia en todos los niveles de la vida nacional.

Para la democracia, en nuestro país, los ejes de fuerza se constituyen con: el movimiento social, las fuerzas políticas, el gobierno y el Parlamento.

Articular el máximo consenso posible entre estos actores, sin afectar sus propios espacios autónomos, es un requisito indispensable para contar con la fuerza capaz de vencer las trabas autoritarias.

Este consenso para consolidar la democracia debe fundarse en el principio de que esta consolidación debe ser un hecho de profunda significación social, en donde el rol del pueblo organizado, consciente y movilizado es lo que le confiere fuerza al desafío democratizador.

Esto es así, por cuanto las instituciones democráticas -y esto incluye al gobierno y al Parlamento-, a diferencia de los poderes de raíz económica o militar, no tienen poder en sí, sino que lo obtienen y desarrollan en tanto se afirman en la sociedad, particularmente en la sociedad popular. Sólo el apoyo y el compromiso del pueblo con las instituciones democráticas les confieren poder efectivo; de lo contrario, tenderán a quedar condicionadas a las instancias con poder propio, como las castrenses y/o económicas.

Lo anterior supone que:

- Las instituciones democráticas conciten no sólo el respaldo del "ciudadano", a través del voto, sino también de los colectivos sociales organizados y con vida permanente.
- Estas instituciones deben ir compartiendo niveles razonables y adecuados de sus funciones ejecutivas con los conglomerados populares y deben ser eficientemente democráticas, por su capacidad de resolver demandas sociales, pero también por su capacidad de recrear los nexos y relaciones entre las instancias estatales y los diversos sectores de la sociedad civil.

3. Consolidación y profundización democrática y el rol del movimiento

Para los socialistas, la izquierda y las fuerzas progresistas en general, nuestro objetivo no se agota con la consolidación de la democracia, sino que nos planteamos su ampliación y profundización como camino de construcción de los cambios estructurales más profundos de perspectiva socialista que postulamos.

En tal sentido, concebimos a la democracia como un componente sustancial de nuestra estrategia y de nuestro proyecto de sociedad, pero entendemos que la consolidación de una institucionalidad y de un régimen político democrático, si bien genera el marco propicio para emprender transformaciones de carácter revolucionario, ello depende de la capacidad de gestar en el decurso democrático una hegemonía social y político-cultural para dichas transformaciones.

Ello repone el desafío de construir la fuerza social y política capaz de asumir esa tarea -lo que tradicionalmente hemos denominado bloque por el socialismo-, que en el futuro cercano se juega no sólo en el plano de las alianzas políticas, sino también en la capacidad de articular durante la transición la tarea de consolidar la democracia y de ampliarla y profundizarla.

Siendo cierto que no se puede consolidar a ultranza un mecanismo que a la postre obstaculice la ampliación democrática, como tampoco pueden impulsarse, en cualquier circunstancia, políticas de radicalización democrática, si éstas afectan el proceso global de democratización, lo claro es que la consolidación y ampliación forman parte de un mismo y único proceso democratizador.

Esto último es posible, si en las tareas de la transición se gesta una profunda y amplia rearticulación del movimiento social, como actor protagónico del proceso de consolidación democrática. Algo de esto hemos señalado en el capítulo precedente.

El desarrollo de una sociedad civil, de un movimiento social sólido es la herramienta más eficaz para articular consolidación y profundización democrática. Una base social estructurada ampara con poder real la institucionalidad emergente y, a su vez, crea realidades nuevas y férreas sobre las cuales se hace dable perfeccionar o profundizar la democracia.

Esto supone, a lo menos, tres grandes áreas de acción:

- Recomposición del movimiento social, en cuanto a ampliar la representación de las organizaciones sociales y fortalecer sus capacidades negociadoras y participativas.
- Readecuación, tendiente a dar cuenta de las nuevas realidades sociales, modificaciones inter-clases, emergencia de nuevos sectores y de problemáticas nuevas, como también en las relaciones dentro de los cuerpos sociales, en el trato de las cuestiones sociales y en el vínculo con las esferas institucionales y políticas. Aquí resalta el tema de la autonomía de los movimientos sociales.
- Expansión de la democracia y del poder democrático en la base social. Esto implica recrear una cultura popular democrática y afianzar poderes reales en el mundo social y territorial.

4. Las alianzas para la democracia y el cambio

Señalábamos la necesidad de forjar un amplio acuerdo de sustentación democrática. El eje del mismo es, sin duda, la actual Concertación por

la Democracia. Pero este acuerdo de sustentación requiere ampliarse a todas las fuerzas democráticas interesadas en concurrir; ello implica a la izquierda y particularmente al PC, estando atento incluso a incorporar eventuales desgajamientos de la derecha, si ésta entra en crisis.

Los contenidos de este acuerdo de sustentación democrática deben ser aquellos necesarios para una efectiva reinstalación de la soberanía popular, es decir incorporar temas como el tipo de régimen político democrático a construir y los necesarios cambios institucionales que para ello se requieren. Aquí destaca el tema de la mantención o no del actual sistema presidencialista o su modificación hacia uno de carácter semi-presidencial y las consiguientes facultades de un Parlamento. Los cambios en materia de Ley electoral y de partidos políticos, la legislación para el tema del poder local (municipios, etc.), el tipo de Estado, cómo enfrentar en concreto los problemas de derechos humanos, la política frente a las FF.AA., en fin, todas aquellas materias de carácter democrático-nacional que consoliden una efectiva democracia.

Un proceso similar de articulación debe buscarse a nivel del mundo social y gremial, en función de temas como la legislación laboral, la reorientación de la política económica, etc.

La izquierda chilena, junto al desafío de ser fuerza artífice y gravitante de los necesarios consensos democráticos amplios que la transición requiere, debe ser capaz de reponerse como alternativa de poder en nuestro país. Parte de esto pasa por su rol en la generación de estos consensos, que le permiten vincularse con las grandes mayorías nacionales y erigirse como fuerza capaz de gobernar al país y articular intereses diversos y plurales, pero también pasa por la capacidad de acometer estas tareas con su propio perfil, afincado en los principios que le dieron origen como opción popular y transformadora de la sociedad, en que esa propuesta transformadora se origine en los cambios sociales y culturales que Chile tiene en virtud de la aplicación del modelo autoritario y de los nuevos problemas de la humanidad, reponiendo en estas nuevas circunstancias un proyecto que articule la libertad con la justicia social y la dignidad del hombre.

Esta necesaria renovación o actualización de la izquierda pasa por postular y definir cómo la democracia se inscribe en nuestro proyecto de sociedad y en nuestra estrategia revolucionaria; cómo incorporamos a nuestra visión clasista temas como la juventud, la mujer y la defensa del medio ambiente -que constituyen movimientos sociales no asimilables estrictamente a un análisis de clase-; cómo avanzamos en la definición de un nuevo concepto o tipo de alianzas -que respeten y promuevan la pluralidad del actor popular y de sus expresiones políticas-; cómo avanzamos en la superación de la división en tres tercios del espectro político, ejerciendo irradiación hacia el centro político, de modo de encarnar efectivamente una propuesta de mayoría.

En este propósito juega un rol central la unidad socialista, pues la existencia de un gran Partido Socialista, enraizado en la izquierda, facilita la inclinación de la balanza en favor de las soluciones progresistas en nuestro país, y porque corresponde hoy día a los socialistas la misión histórica de liderar la izquierda chilena, la que debe ampliarse, integrando el máximo de fuerzas progresistas, que hoy se expresan en el PAIS, PPD, Humanistas y Verdes.

5. Respecto del futuro gobierno democrático

Sin duda que el gobierno, y también el Parlamento, son las nuevas esferas de poder que se agregan al ya acumulado a nivel del movimiento social y de las organizaciones políticas, y son las que permiten hablar de que iniciamos una transición democrática.

A su vez, es innegable que el éxito de la transición depende en grado sumo del éxito del Parlamento y del gobierno, por cuanto ambos se erigen en torno a tareas centrales de carácter democrático-nacional, es decir en torno a desafíos compartidos por todos los sectores democráticos del país.

Por otra parte, los poderes autoritarios vigentes requieren ser enfrentados con el máximo fortalecimiento de los poderes democráticos emergentes, teniendo presente que el Parlamento, y más aún el gobierno, deben ser las expresiones más representativas de la voluntad democrática de nuestro pueblo, frente al polo autoritario y militarista.

Tanto el gobierno como los parlamentarios democráticos son el producto de la unidad del conjunto del pueblo y sus expresiones sociales y políticas, y deben responder a ese mandato popular unificador frente a la dictadura.

Hacemos estas consideraciones para señalar que la amplitud y forma que adquirirá el futuro gobierno no se encuentran plenamente establecidas y, por tanto, de aquí a marzo, y en particular durante la campaña electoral, el Partido debe tener una política frente al tema, de modo de construir, al calor de la lucha de los próximos meses, la capacidad política y el respaldo de masas que permitan que ese gobierno sea del tipo que nosotros postulamos.

Ese tipo, amplitud y forma que asuma el futuro gobierno no pueden ser el mero resultado de un proceso de negociación política cupular, sino un hecho de profunda significación social. La existencia de dicho gobierno es el resultado de los apoyos y acuerdos de toda la oposición en torno al candidato único Patricio Aylwin y el producto de la lucha de todo un pueblo que le otorga el mandato de representarlo, haciendo efectiva la superación de las trabas autoritarias y sus anhelos de libertad, justicia social, participación y pleno imperio de los derechos humanos.

En tal sentido, la fuerza y capacidad que el futuro gobierno tenga para cumplir dichos propósitos está en directa relación no sólo con su eficiencia, sino con que en él se sientan efectivamente representadas todas las fuerzas que han luchado en contra de la dictadura, tras una concepción de la transición y una política gubernamental común y coherente.

Hacia tal tipo de gobierno debemos bregar en los próximos meses, encarnando estas ideas en las grandes mayorías nacionales, a través del discurso de nuestros candidatos al Parlamento, de nuestros dirigentes sociales y políticos, en las giras y encuentros con Patricio Aylwin, etc. Se trata de materializar aquella concepción de un "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".

Construir hegemonía para este tipo de gobierno requiere, desde ya, manifestar que los socialistas aspiramos a forjar y ser parte del futuro gobierno con todas las fuerzas democráticas, lo que incluye a la izquierda

en su conjunto, y que estamos no sólo dispuestos, sino que es nuestro deber para con el pueblo concurrir a un gobierno de esas características.

Llegado el momento en que se materialice la formación de dicho gobierno, corresponderá evaluar los grados de acercamiento que éste tendrá con el carácter y amplitud que postulamos.

¡Con Unidad y Lucha, Venceremos!

COMISION POLITICA
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, septiembre de 1989